

# LA EDUCACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO

La Unidad de Investigación Periodística de la Institución Universitaria Politécnica Gran Colombiano dedicó 17 meses al proyecto La guerra va a la escuela, un estudio sobre el impacto del conflicto armado en la educación básica y media en Colombia. La indagación de la primera fase permitió identificar que, entre el primero de enero de 1984 y el primero de diciembre de 2015, 1.901.011 personas vivieron un hecho victimizante cuando se encontraban en edad escolar, es decir, entre los 6 y los 17 años; la cifra corresponde al 24% del total de víctimas registradas en el periodo señalado. Cabe destacar que la mayor parte de estos menores ha sido víctima del desplazamiento forzado.

Además, se encontró que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) atendió a 5.850 niños y adolescentes desvinculados del conflicto, entre los años 1999 y 2015. De ellos, el 71% son hombres y el 29% mujeres. Además, 547 son indígenas y 380 son afrocolombianos.

Los hallazgos señalados conducen a afirmar que en el marco del conflicto armado las dos grandes complejidades que atraviesan los escolares son el desplazamiento, que obliga al abandono de la institución educativa, y la vinculación de menores de edad con grupos armados ilegales.

Por otra parte, se identificó que los docentes y directivos también hacen parte de la lista de víctimas. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) manifestó que, a diciembre de 2015, contaba con aproximadamente 6 mil docentes amenazados, 1.100 asesinados, 70 en el exilio y 50 desaparecidos. Entre los sindicatos de docentes más golpeados por el

conflicto se encuentran Antioquia, Córdoba, Risaralda, Nariño, Caquetá y Putumayo.

La información de Fecode se convirtió en el punto de partida de la segunda parte del proyecto, en tanto llevó a la reflexión de la urgencia de contar lo que ha acontecido durante décadas en el sector educativo en las regiones; cuestión que se conoce superficialmente por cuenta de un silencio mediático nacional, resultado de agendas absolutamente centralizadas.

En consecuencia, nace La guerra va a la escuela II, cuyo objetivo central es analizar el impacto del conflicto armado en la educación básica y media en Putumayo, Caquetá y Antioquia, regiones severamente afectadas por los hechos violentos propios de este fenómeno. La escogencia de los tres departamentos se hizo tras la construcción de una matriz de análisis constituida por las siguientes categorías: víctimas en edad escolar, reclutamiento infantil, masacres, desplazamiento forzado y hechos violentos contra organizaciones de docentes.

El marco temporal de la investigación, tal como se hizo en la primera etapa, parte del año 2010 y va hasta el año 2015, fechas que coinciden con los últimos años del proyecto global Educación para Todos, liderado por 164 gobiernos del mundo. Uno de los informes de seguimiento a la iniciativa, que la Unesco publica en 2011, revela que en las zonas con conflictos armados la educación se torna compleja, tanto para quienes la imparten como para quienes la reciben, hecho que se complejiza porque la situación es poco visibilizada por los medios de comunicación. Por esta razón, el proyecto La guerra va a la escuela busca hacer público -en su primera y segunda parte- la manera en que el conflicto ha llegado hasta la esfera educativa en Colombia.

La metodología que se ha utilizado a lo largo del proyecto corresponde a la combinación de las formas tradicionales de indagación periodística y la propuesta de construcción de información del periodismo de datos. Por consiguiente, se hicieron entrevistas a fuentes primarias y secundarias, categorizadas en testimoniales, expertas y oficiales. También se revisaron leyes sobre el presupuesto nacional para la educación, políticas económicas y

sociales (Conpes), además, libros de rendición de cuentas de las secretarías departamentales de educación.

Se consultaron los datos abiertos de la Dirección de Registro y Gestión de la Información de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el Registro Único de Víctimas, el Departamento de Planeación Nacional (DNP) y el Ministerio de Educación Nacional (MEN). Finalmente, se solicitó información mediante derechos de petición a entidades públicas responsables de la educación en cada uno de los departamentos en estudio.

A continuación se presentan los resultados más significativos de La guerra va a la escuela II, focalizados en Antioquia y Caquetá. Lo correspondiente a Putumayo fue publicado en el primer e-book y en el primer multimedia del proyecto; además, los resultados de esta región también se retoman en el multimedia que acompaña esta segunda entrega.

### CASO ANTIOQUIA

En Antioquia los recursos asignados entre 2012 y 2015 para el fortalecimiento del acceso y permanencia en la educación básica y media de la población en situación de desplazamiento y en riesgo por el conflicto armado son, según la Secretaría de Educación del departamento, 253.458 millones de pesos, que se invierten en 55.241 estudiantes beneficiados con estímulos de gratuidad. De ese total 4% son afrocolombianos, 1,7% son indígenas y 3,2% son personas en condición de discapacidad.

También se encontró que en el departamento sobresalen los índices de artefactos explosivos en predios cercanos a las instituciones escolares. Esta investigación revela que entre 2005 y 2015 se vieron afectadas alrededor de 37 escuelas. Los municipios que más reportes presentan sobre la cuestión son: San Luis, Dabeiba y Valdivia. Según Jorge Calero, Defensor delegado para la prevención de riesgos de violaciones de DDHH y DH de la Defensoría del Pueblo de Colombia, las escuelas -sobre todo en áreas rurales- han sido punto blanco de ataques de grupos armados ilegales, por tratarse de estructuras estatales, o por encontrarse en predios próximos a complejos

militares y estaciones de la Policía. El defensor también señala a unidades del Ejército Nacional por ocupar escuelas y por atrincherarse en ellas cuando enfrentan ataques con grupos guerrilleros. En consecuencia, en las áreas que rodean las instituciones académicas se encuentran minas antipersonales y otros elementos explosivos.

Lo anterior indica que el departamento requiere inversiones económicas altas en el sector educativo, porque necesita brindar estímulos que eviten la deserción escolar de las víctimas que habitan la zona, así como implementar medidas de seguridad de los integrantes de la comunidad académica sobre todo de las zonas rurales. De acuerdo con los estudios preliminares sobre el presupuesto de inversión para las regiones del país, realizado por el DNP, en 2016 Antioquia requeriría aproximadamente 2,8 billones de pesos. Los sectores prioritarios son: inclusión social y reconciliación, trabajo, hacienda, salud y protección social, vivienda, ciudad y territorio. La educación se encuentra en el sexto lugar, con un presupuesto de 172.918 millones de pesos.

### CASO CAQUETÁ

El estudio de Caquetá conduce a señalar que, para sus gobernantes, uno de los grandes problemas de la región es el alto índice de deserción escolar que se presenta en las áreas rurales. La Secretaría de Educación del departamento informa que las causas más significativas que conducen al abandono de las aulas son: la dependencia económica de algunas familias a los cultivos ilícitos, las altas tasas de desplazamiento, y el riesgo latente de la vinculación de niñas, niños y adolescentes a grupos armados ilegales.

Entre los proyectos nacionales más fuertes para afrontar la deserción de las aulas en regiones vulnerables está el Programa de Alimentación Escolar (PAE). En Caquetá- entre el año 2013 y el año 2015- se invirtieron para la ejecución del programa 22 mil millones de pesos. El monto incluye 42.773 raciones de desayunos y 9.534 raciones de almuerzos: así mismo, contempla 1.224 cupos de almuerzos destinados a menores desplazados, para un promedio de 100 a 152.

Al problema de la deserción se suma el riesgo permanente que corren los docentes tras recibir constantemente amenazas, razón por la cual Fecode señala que el sindicato de Caquetá es uno de los más violentados por grupos ilegales a lo largo de la historia del conflicto armado. De ello dan cuenta las 187 amenazas registradas a profesores entre el año 2011 y el año 2015, de acuerdo con información entregada por la Secretaría de Educación del departamento. San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá y San José del Fragua son los municipios en los que se reporta, cada año, mayor repetición del delito. Representan, del total de las amenazas departamentales, el 25%, el 8% y el 9% respectivamente.

De otro lado, el DNP proyectó que en 2016 el presupuesto de inversión para Caquetá debería ser de aproximadamente 427 mil millones de pesos, según documento de la entidad titulado Regionalización presupuesto de inversión vigencia 2016, que se entrega a la Comisión Económica de la Cámara de Representantes y al Senado de la República. De acuerdo con las necesidades de la población, los recursos convendrían destinarse a los sectores de inclusión social y reconciliación, salud y protección social, transporte, trabajo y vivienda, ciudad y territorio. La educación ocupa el octavo lugar, con un presupuesto de inversión de 19.930 millones de pesos.

Las cifras señaladas constituyen la columna vertebral de lo que el lector de este e-book encontrará. Es necesario apuntar que en reiteradas oportunidades la directora de la investigación intentó obtener información de otros sindicatos de docentes de los departamentos seleccionados, pero no fue posible, pese a que se logró comunicación con algunos de sus miembros, quienes manifestaron interés en entregar información. No obstante, las respuestas a cuestionarios enviados vía electrónica nunca llegaron.

### LA ESCUELA DESPUÉS DE LAS FARC

La guerra va a la escuela II dedica un aparte a menores desvinculados de las Farc, que han retornado a las aulas escolares como parte del proceso de reincorporación a la vida civil. El reto, fundamental para la investigación, es producto de la necesidad de que esos menores sean reconocidos como acto-

res del ecosistema social, y, por consiguiente, un trabajo dedicado al impacto del conflicto armado en la educación no debía desconocerlos.

Para lograr lo planteado, se hizo contacto con un colegio ubicado en el occidente de Colombia, que cuenta con un aula dedicada exclusivamente al trabajo con menores desvinculados del conflicto, procedentes de diferentes regiones del país, con edades entre los 13 y 17 años. Tras un trabajo de sensibilización que realizaron las docentes encargadas del grupo –debido a que estos menores son renuentes a contar sus historias- se logró que narraran por medio de cartas y dibujos lo que ha significado para ellos volver a la escuela o llegar a ella por primera vez.

Sus relatos revelan la percepción de exclusión que el entorno educativo les provee. Relatan que sus compañeros, cuando se enteran de que ellos hicieron parte de las filas de las Farc, los señalan como asesinos y peligrosos. También queda claro en las ilustraciones y textos que el conflicto está vigente en sus vidas, debido a que se representan vestidos con camuflados y portando armas. No obstante, advierten que no quieren volver a la guerra, y que estudiar es un anhelo que está con ellos desde sus días en los campamentos guerrilleros.

Lo expuesto hasta este punto son macrocategorías que el lector puede explorar detalladamente al entrar al e-book, y transitar por la segunda fase con la que se cierra este proyecto periodístico y académico en el que se evidencia que la educación sí es una víctima del conflicto armado nacional. Por esta razón es prioritario que el gobierno reconozca que la reconstrucción del tejido social precisa no solo de buenas voluntades sino de asegurar igualdad de oportunidades educativas. En suma, vivir humanamente, que es lo mismo que decir dignamente, es el reto real de un Estado que plantea la paz, y de una sociedad que la exige. Entre los caminos para lograrlo está la educación con calidad.